

DERECHO A LA INFORMACIÓN - CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS - DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE - LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y.P.F. SA- s/ amparo por mora Fecha: 10 de noviembre de 2015 Fallos: 338:1258 CAF 37747/2013/CA1-CS1

Hechos: Rubén Héctor Giustiniani promovió acción de amparo con el objeto de que YPF S.A. le entregue copia íntegra del acuerdo de proyecto de inversión que la sociedad había suscripto con Chevron Corporation para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia del Neuquén. El reclamo fue rechazado en primera instancia y confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Esta decisión dio origen a un recurso extraordinario. La Corte Suprema -por mayoría- revocó lo resuelto. La jueza Highton, en disidencia, compartió el criterio de la señora Procuradora Fiscal que destacó que el proceso había tramitado sin la participación de Chevron Corporation por lo que correspondía declarar la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo sin su participación.

Doctrina: La Corte Suprema consideró que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. IV) y por el art. 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y, en ese contexto, la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión a través de la descripción de sus dimensiones individual y social. En tal sentido, señaló que YPF S.A. es uno de los sujetos que, por encontrarse bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, se halla obligado a dar cumplimiento a las disposiciones del decreto 1172/03 en materia de información pública. La empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público por lo que no puede, en el marco de los principios de una sociedad democrática, negar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión. Afirmó que no parece posible extender los alcances de una previsión orientada claramente a la búsqueda de la eficiencia económica y operativa de YPF S.A. - art. 15 de la ley 26.741- hasta el extremo de sustraerla totalmente de las obligaciones de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información que goza de protección constitucional y convencional pues la información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina. También, señaló que no se presenta un conflicto normativo si el art. 15 de la ley 26.741 exime a Y.P.F. S.A. del control interno y externo que pueden realizar diferentes organismos del Estado Nacional, mientras que el decreto 1172/03 reglamenta el control democrático que supone el acceso a la información pública y que puede realizar cualquier ciudadano para vigilar la marcha de los asuntos de interés general. Explicó que el derecho de acceso a la información, en tanto elemento constitutivo de la libertad de expresión protegido por normas constitucionales y convencionales, no es un derecho absoluto sino que puede estar sujeto a limitaciones. No obstante, tales restricciones deben ser verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos legítimos y ser necesarias para alcanzar la finalidad perseguida. Señaló que si Y.P.F. se limitó exclusivamente a invocar la concurrencia de las causales de excepción contempladas en el art. 16 del Anexo VII del decreto 1172/03 y en el art. 7 de la ley 25.831 para justificar el rechazo de la solicitud de información que se le formulara, sin apoyar mayores precisiones al respecto, la convalidación de tal respuesta significaría dejar librada la garantía del acceso a la información al arbitrio discrecional del obligado y reduciría la actividad del magistrado a conformar, sin ninguna posibilidad de revisión, el obrar lesivo que es llamado a reparar. Consideró que la afirmación de la empresa en el sentido de que difundir información confidencial puede afectar el desarrollo de los contratos petroleros no alcanza para explicar las razones por las que su revelación podría afectar un interés de aquellos protegidos por el art. 16, Anexo VII, del decreto 1172/03 y el art. 7° de la ley 25.831. Finalmente, manifestó que si el art. 2° del Anexo VII del decreto 1172/03 identifica en forma clara y precisa a los sujetos obligados a garantizar el acceso a la información pública, no corresponde dar intervención a un tercero que ninguna alegación podría formular en un pleito en el que se debate el derecho de una persona a acceder a información de interés público, máxime cuando, al momento de suscribir el contrato materia de la litis, conocía o debió conocer el régimen de

publicidad al que se encontraba sometida la actuación de la sociedad con la que concluyó el negocio jurídico.

Votación: Ricardo Luis Lorenzetti - Elena I. Highton de Nolasco (en disidencia) - Carlos S. Fayt - Juan Carlos Maqueda